

0,7 ya;
0,7 bien;
0,7 y más

En un solo año la sociedad española ha visto emerger una serie de movilizaciones cuyo fin es la solidaridad internacional. Para nuestro país, este movimiento, tanto en sus fines como en su modo de proceder, es todo un mensaje. Este artículo quiere ser una aportación a la biografía colectiva de la «Plataforma 0,7 %» exponiendo sus metas y analizando su movilización desde la perspectiva de un observador participante.

Fernando Vidal Fernández *

El auge del solidarismo

EL origen del movimiento 0,7% se encuentra en un pequeño grupo de ciudadanos cuya trayectoria vital ha estado siempre vinculada a los problemas del Tercer Mundo y han mantenido experiencias prolongadas en misiones, cooperación, campañas de

* Sociólogo. Miembro de la Plataforma 0,7. Madrid.

concienciación y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Estas personas coincidieron en una comisión de trabajo dentro de la Asociación Pro-derechos Humanos de España y desde ahí emprendieron la campaña.

La Plataforma 0,7%, por tanto, no sale del vacío sino que se inserta en una tradición solidaria española que se concreta en numerosas entidades promotoras del desarrollo que, desde hace decenios, han hecho una gran labor. Todas estas organizaciones, junto con las personas que trabajan por el Tercer Mundo forman lo que llamaremos la «zona solidarista». Esta zona está compuesta por todas aquellas asociaciones y grupos que trabajan promoviendo la justicia o rehabilitando a los excluidos de la sociedad en el Tercer y Cuarto Mundo. Desde hace un lustro, ha habido en España un auge de esta zona social y es perceptible para cualquier observador que se han multiplicado tales actividades entre nosotros.

Hay iniciativas como el «sinfronterismo»: profesionales que promueven proyectos desde su propia cualificación, que reúne a entidades como «Médicos Sin Fronteras», «Ingenieros Sin Fronteras», «Periodistas Sin Fronteras», «Payasos Sin Fronteras», etc. Otros fenómenos son: primero, el gran «boom» de voluntarios y de las organizaciones de voluntariado; segundo, la emergencia de muchos cooperantes que se comprometen a largas estancias en el Tercer Mundo ayudando a los pueblos; tercero, una sensibilidad mayor por la ayuda a los países afectados por desastres o conflictos bélicos, ante los cuales se montan muchos cauces diferentes (los ayuntamientos acogen niños, las cadenas televisan grandes campañas espectáculos, cuestaciones por teléfono, etc.).

Este auge solidarista tiene mucho que ver con una sociedad española que, desanimada por la corrupción, ha tocado fondo en los valores socio-políticos. También está relacionado con un movimiento cíclico que vincula el brote de redes de ayuda social a la crisis económica. Indudablemente, muchas de las acciones que se han presentado son una nueva versión del «limpiaconciencias» de campañas como aquella de «Ponga un pobre en su mesa» que genialmente retrató Berlanga en su película «Cándido». Detectamos también un componente de «pornografía social» en los *reality shows* que se programan sobre tragedias personales y colectivas. Pero en medio de esas impurezas, también vemos impulsos honestos de gentes que van descubriendo y optando por una nueva ética comunitaria.

Desde aquella comisión de Derechos Humanos, se intenta enfocar su acción a un cambio estructural de la situación. Ese cambio ya fue ponderado y recomendado por las Naciones Unidas en dos declaraciones de los años setenta y de los noventa donde estima que, para que haya una mejora cualitativa que frene la depauperización de los pueblos del Sur, es necesaria la inversión de 125.000 millones de dólares anuales. Esta cifra equivale al 0,7% del Producto Interior Bruto de los Estados del mundo rico. De acuerdo con esa solicitud de la Organización de las Naciones Unidas, este pequeño grupo empieza una primera etapa de su movilización con una recogida de firmas donde se pide a España que aporte el 0,7% del PIB en los Presupuestos Generales del Estado, es decir, 450.000 millones de pesetas cada año.

La campaña de firmas llega a reunir el apoyo de más de medio millón de españoles, pero se comprueba que es insuficiente tanto para concienciar a la ciudadanía como para presionar al gobierno. Y cada día perecen miles de personas.

El problema más crucial de la humanidad

EFFECTIVAMENTE, la situación mundial es un continuo caos y esta coyuntura, lejos de mejorar, empeora para los países más pobres. Los datos estadísticos hablan por sí solos: entre 1960 y 1990 se ha duplicado la desigualdad entre los países más ricos y los más pobres; el gasto en sanidad y educación en estos países pobres decreció en más del 50% y 40% respectivamente durante los años 80.

Esta década de los 90 es fundamental para enmendar un mundo que ve peligrar su supervivencia global por la pobreza que produce directamente males como la bomba demográfica, la inmigración masiva, el deterioro del medio ambiente, etc. Este aceleramiento en la catástrofe mundial, tal como podemos contemplar televisivamente por las somalias y ruandas que comemos frecuentemente, lleva a la conclusión de que hay que actuar rápidamente porque no está claro que el capitalismo pueda absorber «naturalmente» este «mundicidio».

Como se puede concluir, este caos no afecta únicamente a los países pobres, sino a todo el mundo: por eso no es una cuestión sólo de solidaridad con el pobre, sino de supervivencia propia. Los Estados no están

tratando con un problema ajeno, sino que es una crisis progresiva que afecta a la misma seguridad nacional.

Sin duda estamos hablando del mayor problema moral de la humanidad. Tres criterios nos hacen verlo como el mayor de cuantos se plantean personas, instituciones, gobiernos y el planeta Tierra:

1. El problema *más universal* (el que afecta a más gente: todos).
2. El problema *más urgente* (el que, si no actuamos, va a degenerar más).
3. El problema *más crucial* (cuya solución mejoraría más la situación global).

Algunas personas acusan a «los del 0,7» de ser apocalípticos. Pero también hombres de pensar sereno y racional, como 99 premios Nobel, han anunciado en una declaración conjunta que, si no se adoptan las medidas oportunas, en dos décadas amenaza una catástrofe social y ambiental sin precedentes. Y es que a medida que estamos en un mundo más planetario y capaz, también son más globales y potentes las crisis. *Nunca tuvimos mayor capacidad de solucionar los cada vez más grandes problemas que generamos*. No obstante se registran dentro de minorías un rasgo milenarista ante el siglo XXI, ante el que no hay que dejar opción a la demagogia y sí persistir en un diálogo social basado en argumentos éticos y análisis racionales.

Aparte de alguna minoría de cínicos, la inmensa mayoría de la población española se horroriza al ver las hambrunas africanas y otras lacras; siente un malestar profundo ante el que no sabe cómo actuar. Parte de la gente canaliza su deseo de cambio a través de las ONGs, pero todos sabemos que es insuficiente... esa «energía social negativa» tiene que salir por algún sitio porque la «presión» es cada vez mayor.

Segunda etapa: La huelga de hambre

UNO de los aciertos de la Plataforma es que ha sabido encauzar esa energía en una meta concreta y posible: el 0,7% del PIB en los Presupuestos. Es un fin suficientemente claro y concreto como para congregarse a su alrededor a la gran opinión pública. Según el psicólogo político Alejandro Romero, parte de la rapidez de la

movilización se explica porque el «0,7 YA» es un lema fácil de comprender por el ciudadano medio.

No obstante, la opinión pública está bastante dormida todavía, y ante un problema tan desmesurado se inicia una acción desmesurada: una huelga de hambre con el fin de incidir lo más fuerte posible sobre la conciencia española. Y así en el otoño de 1993 un grupo de españoles se identificaron con la situación de cientos de miles de personas en ayuno continuo, uniéndose al *colapso* del mundo. Sólo que el de acá no era forzoso.

Al final de la huelga de hambre este pequeño grupo no llegó en solitario sino que creció hasta convertirse en una plataforma que reunía a distintas personas e instituciones. La huelga se vio acompañada de numerosas acciones cívicas: cada día del mes rematado en «7», es decir, los días 7, 17 y 27 de cada mes se han reunido frente a ministerios y en plazas públicas como la madrileña Puerta del Sol, para demandar el 0,7%. Estos gestos reunían en torno al medio millar de manifestantes y en sus formas eran imaginativos: varios se disfrazaban de «zombies» que iban *entrándole* a los peatones como fantasmas de los pobres muertos ese día... Las manifestaciones llegaron a reunir miles de personas hasta llenar la Puerta del Sol el diez de diciembre. A éstas se sumaron otras actividades, como ayunos colectivos en apoyo a los huelguistas, charlas en centros de enseñanza secundaria y universitaria, sindicatos, la Iglesia, etc. La movilización permitió a la Plataforma introducirse dentro del discurso de los medios de comunicación por lo que la potencia de la movilización se multiplicó. En estas primeras acciones un 65% de España ya apoyaba la reivindicación.

El gobierno atendió a las demandas y acordó incluir en los Presupuestos que se aprueban en 1994 para 1995, el 0,5% y en los del siguiente año, los del 96, el 0,7%. Ambas cantidades habían de ser dadas con suficientes garantías de calidad. Firmado este pacto, la Plataforma interrumpió el ayuno: habían sufrido 29 días de huelga de hambre. Pero el gobierno no cumplió los pactos explícitamente acordados ya que se negó a introducir lo prometido en los Presupuestos Generales del Estado tal como Felipe González había afirmado. Esto es un grave atentado contra las bases más íntimas del derecho, que es la confianza mutua en ser honesto en los compromisos que se han adquirido.

Lejos de desanimarse, se comenzó a estudiar las posibilidades que había de presionar tanto a los políticos estatales y locales, como a la

ciudadanía. Se iban a presentar pronto las enmiendas al Presupuesto en el Parlamento, por lo que había que centrarse en introducir las reivindicaciones de la Plataforma. La primera etapa de la movilización fue la recogida de firmas; la segunda, la huelga de hambre y la tercera fase se gestó tras el desengaño de los acuerdos. Al final de esta segunda etapa habían logrado ya tener una identidad popular como organización, tenían a un centenar de personas comprometidas en la Plataforma y el apoyo explícito de otro centenar de entidades civiles.

Pero, a la vez, también se escuchan desde la ciudadanía y las instituciones, voces disonantes con la petición del 0,7%. Antes de describir cómo se articula la tercera etapa de esta movilización, vamos a profundizar en la propuesta de la Plataforma 0,7% y en las razones contra la reivindicación o que hacen dudar de su aceptación.

La ayuda oficial al desarrollo

HASTA el comienzo de las «moviliza- ciones 0,7%», España dedicaba una tercera parte de lo que se le solicita desde la ONU, es decir sólo un 0,26% de su PIB y además, según las autoridades mundiales, lo hacía mal. La Comisión Internacional de supervisión de la Ayuda al Desarrollo de los Estados (CAD) evalúa cuál es la calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que realizan los diferentes países: el resultado de su examen es que España recibe un sonoro suspenso ya que, en toda la comunidad internacional, es el país que da una orientación más mercantilista a esa ayuda, y es el segundo país peor calificado en cuanto a la dureza de las condiciones de concesión de los fondos de ayuda.

La AOD de los países desarrollados es un instrumento político pocas veces usado convenientemente. No hay más que observar que en 1991 el 50% de la AOD a nivel internacional fue destinada a 12 países que recibieron 19.446 millones de dólares: esos doce países gastaron una cantidad similar en armas y en mantener al ejército. Seis de ellos tienen un gasto militar superior a la ayuda recibida. Estos doce países adquirieron armas por valor de 27.750 millones de dólares a los siguientes estados: Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, es decir, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

La cooperación internacional española se divide en dos grandes apartados: la cooperación multilateral y la bilateral.

1. La multilateral es aquella que se realiza a través de contribuciones a organismos internacionales y no directamente a países, y se canaliza con los siguientes instrumentos:

1.1. A través de la política de la Unión Europea concretada en el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) que habilita dos vías: primero, con carácter extrapresupuestario encauza aportaciones hacia África, el Caribe y el Pacífico. Segundo, dentro del presupuesto comunitario ordinario hay un destino a financiar dos tipos de programas: de Ayuda Alimentaria y de cooperación con América Latina, Asia, Cuenca Mediterránea y Europa del Este.

1.2. Por medio de organismos internacionales financieros (OIF). Nuestro país es miembro del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional desde 1958, y de todos los grandes bancos regionales de desarrollo (del Banco Interamericano de Desarrollo desde 1976, del Banco Asiático de Desarrollo desde 1984 y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo desde su fundación). Su objetivo es financiar importaciones como ayuda directa a la balanza de pagos.

1.3. Con organismos internacionales no financieros (OINF), que tienen por fin el promover la cooperación en los ámbitos cultural, técnico-científico, laboral, etc. Algunos son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

2. La cooperación bilateral se realiza con contribuciones directamente establecidas entre el país donante y el receptor de la ayuda, a través de tres mecanismos:

2.1. La Cooperación Oficial Descentralizada (COD) es la prestada por los municipios, autonomías y otros organismos locales de la Administración.

2.2. Programas/Proyectos de tres tipos: uno, financiación a propuestas de ONGs; dos, ayudas de emergencia (gran parte de la ayuda a Ruanda fue a través de este dispositivo) y alimentarias; tres, la asistencia técnica, cultural y científica. Esta financiación está gestionada, coordinada y ejecutada por la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional

(SECI) y un organismo autónomo adjunto a la misma que se llama Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

2.3. Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), que suponen aproximadamente 80.000 millones de pesetas. Es el monto más importante de Ayuda Oficial al desarrollo en España. Por eso la Plataforma 0,7 insiste especialmente en este punto. Los FAD son un sistema de créditos legislados en la España de 1976 en condiciones favorables al destinatario.

En España, el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) destinaba 167.000 millones de pesetas (0,26%) y se repartía del siguiente modo:

- Casi el 50% a Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD).
- 30% a aportaciones a la Unión Europea.
- 10% a programas/proyectos.
- 10% a organismos internacionales financieros (OIF), no financieros (OINF) y a la cooperación descentralizada.

0,7 ya

LA Plataforma tiene dos objetivos fundamentales: cantidad y calidad. El fin de cantidad demanda aumentar el volumen presupuestario destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,7% del PIB. Las razones para este aumento son dos esenciales: Primera, justicia con los países más pobres en un mundo. Segunda, el propio interés del Estado que ve amenazada su supervivencia.

Este incremento de la ayuda es, además, un *fin social* en el que hay un amplio consenso tanto en la calle como en la sociedad civil a través de algunos partidos políticos, sindicatos, la Iglesia, casi todas las organizaciones católicas, las ONGs para el desarrollo, muchas universidades, la administración local, las asociaciones de vecinos, movimientos sociales como el pacifista o el ecologista, miles de asociaciones, etc. El 0,7 se ha convertido ya en una *meta social* aunque también hay una minoría de discordantes e indecisos. Las objeciones al «0,7» que se escuchan en la calle las agrupamos en cinco frases:

1. Algunos afirman: «*España no tiene dinero por la crisis*». Es cierto que España ha pasado una crisis, que, por otra parte, ya está remontando. Sin

embargo, la cantidad que se da al Tercer Mundo es tan mínima que es una vergüenza para un país con un desarrollo como el nuestro. No es cuestión simplemente de dar más, sino de dar lo mínimo que se puede pedir a un Estado de nuestro nivel.

Por otra parte, funcionarios y miembros de partidos como PSOE o PP reconocen informalmente ante la Plataforma que sí hay dinero para estos fines tan urgentes y socialmente deseados. Se habla de partidas presupuestarias superfluas que no sólo no exige la gente sino que escandaliza a gran parte. Además, el país no entiende por qué no hay dinero para el Tercer Mundo y sí lo hay para, por ejemplo, la inversión de 850.000 millones de pesetas en 1987 para adquirir «eurocazas» para el Ejército del Aire; o por qué las comisiones de los consejeros por la mera asistencia a los Consejos de Administración de las empresas públicas ascienden a 17.000 millones de pesetas. Y así un largo etcétera que es ya bien conocido por la opinión pública.

La Plataforma reconoce en el gobierno una sensibilidad positiva frente a estos problemas y no acude a una explicación paranoica de las dificultades reales para conseguir el aumento, sino que se pueden verificar dificultades objetivas para los incrementos, sobre todo si provocan un crecimiento del déficit público. Pero también es cierto que falta voluntad política, sobre todo frente a las reivindicaciones de la Plataforma que no demandan dinero, sino una reforma legislativa para que se sepa a dónde va la ayuda y para que se gestionen mejor los fondos. Quizás desde la propaganda de la Plataforma se haya insistido más en cuanto a las peticiones de «calidad» frente al mayor peso de los lemas que requieren «cantidad».

2. Otros dicen: *«Para el Estado son prioritarios los pobres españoles frente a los extranjeros»*. Ciertamente en España el informe FOESSA 1994 nos desveló que, según criterios sociológicos, hay ocho millones de pobres, y es nuestro deber moral el reducir la desigualdad social entre las distintas clases sociales en nuestro país. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las pobreza son muy distintas: hay menos diferencias entre el ciudadano medio y el pobre más pobre de España que entre ese pobre de solemnidad y las masas ingentes que mueren de hambre por el mundo. La prioridad de las hambrunas es desesperada: *es una elección entre la necesidad y la muerte*.

En segundo lugar, ambas ayudas no son incompatibles ni excluyentes: las dos ayudas tienen que mejorarse en un país donde unos ganan

miles de millones de pesetas y otros no tienen un techo bajo el que dormir; en un país con unos niveles de fraude fiscal tan altos, donde no son los pobres y la clase media, sujeta en su mayoría a un salario por cuenta ajena, la que defrauda; en un país que ha gastado cientos de miles de millones en fastos como la Expo mientras que muchos contribuyentes viven en la pobreza. Intentar relacionar directamente un aumento en desarrollo en el Tercer Mundo con una disminución en asistencia social a los españoles pobres, es una maniobra ideológica que hay que analizar muy críticamente y ante la que la Plataforma no puede ceder: por eso en las negociaciones se discutieron cuáles eran las partidas presupuestarias concretas que se invertirían en el incremento.

3. Otros hablan de la procedencia de ese aumento: «*Ese dinero debería salir de los ciudadanos, no del Estado*». Las ONGs aportan cerca de 15.000 millones, y aunque doblaran sus presupuestos, lo cual es muy difícil, no llegarían a un décimo de los 400.000 millones que son necesarios en el año 1995 para el desarrollo. El desarrollo de los países pobres es una empresa de envergadura tan descomunal que ni siquiera todas las ONGs juntas podrían hacer frente, como se ve, a un décimo de lo que la ONU demanda a nuestro país. El desarrollo es una misión que solamente todos los ciudadanos, como Estado, podemos lograr. Además, los impuestos ya salen de los ciudadanos y el Parlamento vota los fines sociales a que se dedican los Presupuestos. Esos fines sociales se construyen en la sociedad civil a través de la legitimidad democrática de las mayorías, y una mayoría absoluta de la población afirmaba ya el año pasado (65%) apoyar la adjudicación del 0,7% del PIB.

Sí, hay que reconocer que una transformación real de la cultura de cooperación pasa por una concienciación de los ciudadanos en relación a sus propios presupuestos personales y que el que simplemente sea responsabilidad estatal puede conducir a un nuevo «limpiaconciencias» más sutil. Y frente a esto, la Plataforma insiste en que sólo cambiando los hábitos personales se puede llegar a esa renovación comunitaria. Pero no hay que olvidar que se busca una modificación estructural que responda a la urgencia de las necesidades.

4. «*El Estado español tiene que ocuparse de los españoles*». Hay varias realidades que no favorecen este argumento: primero, que la cooperación promotora del desarrollo es un principio reconocido y articulado en nuestra legislación. Segundo, las responsabilidades adquiridas ante la Organización de las Naciones Unidas. Tercero, que España está implicada

muy significativamente en misiones humanitarias (Bosnia, Angola, etc.) que han recibido un espaldarazo social y gubernamental, y que son exteriores al interés «más propio» de nuestros ciudadanos. Cuarto, que cada vez las fronteras ceden más a la interdependencia mundial y los conciudadanos no son solamente nuestros paisanos. Además de estas razones y más, es una clave de interés nacional la que convierte la urgencia del desarrollo en un problema propio de los españoles ya que está amenazada la supervivencia del planeta.

5. *«Hay otras formas de ser solidario y el 0,7% no es la única ni la mejor».* Todo proceso de movilizaciones corre un riesgo de radicalización que puede llegar al fanatismo. Uno de esos riesgos es el de afirmar que quien no apoya el 0,7% es insolidario, recurriendo así el movimiento a dos mecanismos: primero, el chantajear al ciudadano; segundo, deslegitimar a sus «oponentes». Aunque es cierto que hay personas e instituciones insolidarias, hay que ver esta práctica como una estrategia no recomendable desde la filosofía de esta Plataforma que pretende convencer, no vencer a cualquier precio. Es comprensible también que muchas personas critiquen la movilización al verse abordados por tal cantidad de información e insistencias, aunque la estrategia dominante en la Plataforma es, por el contrario, avanzar en apoyos a través de la reflexión serena de los propios ciudadanos. Otras críticas que abordaremos al final del artículo, van dirigidas a la Plataforma como movimiento, no a la reivindicación concreta del 0,7%.

0,7 bien

EL segundo objetivo es la calidad y para esto se reclama modificar el PACI (Plan Anual de Cooperación Internacional) del Estado español y el modelo de control político de este Plan. El segundo punto responde a ese juicio popular según el cual los dineros que van hacia el Tercer Mundo se quedan por el camino. La crítica de la Plataforma 0,7 al modo de administrar la ayuda se dirige a varios aspectos: los FAD, el descontrol de la ayuda, y la marginación de las áreas prioritarias.

1. En realidad, la prioridad práctica de los FAC es fomentar el desarrollo comercial e industrial español en el exterior, sobre todo en aquellos

sectores que luego crearán dependencia de recursos humanos y tecnológicos con nuestro país. Como consecuencia, se frena la creación de un tejido productivo en estos países y se reproduce y agrava la dependencia del comercio exterior. Esta ayuda en forma de crédito proporciona, por tanto, un beneficio transitorio hasta convertirse en deuda externa para estos países. Los FAD son *hipotecas* contra el país de destino. Por lo tanto, por el destino que se les da, no se contempla el fomento del desarrollo económico de estos países. Además, como el criterio principal es establecer una relación comercial favorable a España, resulta que los países con necesidades más urgentes están excluidos de las concesiones.

Además, cumplen sólo una parte del Decreto-Ley que les dio origen (el fomento de la exportación española, incluida la de armamento) incumpliendo su segunda parte: el fomento del desarrollo del país receptor. Por eso, a la falta de equidad y eficacia, se suma una posible ilegalidad de la que los casos de corrupción (caso Roldán, etc.) en los que se han visto implicados los FAD, no son más que un síntoma de la ausencia de garantías reales.

2. La ayuda a programas/proyectos gubernamentales carece de la evaluación previa, del control de su ejecución y de la evaluación de sus resultados. Así, hay un descontrol absoluto sobre este tipo de ayuda, favoreciendo el fraude.

3. La AOD no respeta la normativa internacional, en la que se exige que al menos el 25% de la misma sirva para satisfacer las necesidades básicas de los países pobres.

La Plataforma 0,7% demanda un cambio en los mecanismos de cooperación, gestión e información. Las modificaciones van por dos direcciones: una que afecta a los mecanismos por los que deben encauzarse los incrementos, y otra segunda, que afecta al control de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

1. Se pide que el incremento se encauce a través de los proyectos/programas que «elaboren o propongan» las ONGs. En ese «propongan» tendrían cabida proyectos internacionales que presenten y avalen las ONGs españolas. También se reclama que sean públicos y objetivos los criterios por los que van a ser enjuiciados los proyectos, para que no exista un «tapón» político que no permita en realidad el desarrollo de este aspecto.

2. De las condiciones para la concesión de créditos FAD se pide que se excluyan aquellos créditos destinados a adquisición de equipos susceptibles de uso militar, y que haya una comisión especial de seguimiento de los FAD compuesta por los grupos parlamentarios y organizaciones civiles, bajo los principios de publicidad y transparencia.

3. Incremento de la Cooperación Descentralizada.

4. Que del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se dedique *un tercio a áreas de prioridad social* como sanidad e higiene, educación básica, agua potable, nutrición, infraestructuras básicas (electrificación, comunicación u obras hidráulicas), lucha contra el SIDA, agricultura o prevención de catástrofes naturales.

En cuanto al control de la cooperación y ayuda, pide que en 1995 se cree un organismo especializado llamado Consejo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (COCAD) compuesto por la Administración, las ONGs y otros agentes sociales, con un carácter asesor ya que las decisiones corresponden al Consejo de Ministros. Este Consejo establecerá los criterios prioritarios para la concesión y el uso de la AOD española y hará un seguimiento de la misma. También se demanda que en 1995 se establezcan criterios de transparencia y publicidad para toda la información relativa a la AOD.

Además de estos fines a corto alcance, hay otros de medio y largo alcance. A medio plazo, se busca una reforma de la legislación de la cooperación internacional con los países pobres. Se quiere extender la Plataforma 0,7% y este movimiento solidarista a todo el mundo occidental comenzando por Europa. El fin de largo alcance es crear una nueva cultura sociopolítica de solidaridad con el Tercer Mundo, lo que pasa por una transformación de las estructuras socioeconómicas y los estilos de vida cotidiana de las personas.

Tercera etapa: «La acampada de la solidaridad»

LA tercera etapa de la movilización «0,7» se inicia tras la negativa del gobierno a cumplir sus compromisos. Lo primero que se evalúa es la ingenuidad de los líderes de la Plataforma a la hora de negociar con los políticos, que permitió el incumplimiento de lo pactado. La presentación de enmiendas y el debate parlamentario

transcurre durante los últimos meses de 1994, y ésta es la última oportunidad de introducir las reformas que plantean para el año 1995. Por tanto, se deciden a intensificar la presión social sobre la clase política abriendo un proceso de movilización ciudadana.

La acción se materializa en una acampada de una decena de tiendas ante las puertas del Ministerio de Hacienda en el madrileño Paseo de la Castellana.

Castellana. Es todo un gesto el que la acampada-protesta suceda en la principal avenida financiera del país, la «city» española. Al fondo con las «torres KIO», cerca de Torre Picasso, ante todos los grandes bancos y empresas del país, varios «enanos» plantan sus tiendas. El primer día de acampada fue el sábado 17 de septiembre de 1994, casi un año después de que comenzaran la huelga de hambre. Se le pide al gobierno que cumpla lo prometido. Cincuenta días después, a finales de octubre ya pasan de mil las tiendas.

La movilización ciudadana apoyando a la Plataforma 0,7 vivió una aceleración geométrica: a los cincuenta días de acampada frente a la Castellana en Madrid han dormido en las tiendas más de 7.000 personas; en un mes y medio se duplicó el número de comisiones locales sumando hasta 80; pueblos con ninguna tradición civil reivindicatoria se alzan en protesta; más de quinientas organizaciones y asociaciones han dado su apoyo, además de varias universidades y diócesis a través de sus obispos; miles de estudiantes universitarios se encerraron toda una noche en sus universidades; los partidos políticos piden citas con los responsables del 0,7; cada día aparecen varias columnas sobre el 07 en todos los periódicos; la presencia en la radio y en la televisión es diaria; todas las ciudades están llenas de pintadas apoyando el «0,7 ya»; los ayuntamientos conceden el 0,7%, etc.

La acampada en la Castellana, que comenzó con un pequeño grupo, se convirtió en una ciudad nómada en la que duermen diariamente unas quinientas personas y en los fines de semana se triplica. Hay luz eléctrica, cabinas portátiles como servicios, aprovechan el agua de las tomas urbanas, hay una radio montada por los alumnos de la Facultad de Telecomunicaciones en el 107,5, hay un servicio de comidas, etc.

El 9 de noviembre, la presión social logra que los grupos parlamentarios traduzcan el sentir popular en ley, y así se logran en parte los dos objetivos: primero, crece el volumen presupuestario destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo, desde el 0,26% al 0,35% y suma hasta el 0,5% siem-

pre que existan proyectos viables de las ONGs. Segundo, mejora la calidad porque el tramo ampliado es orientado a áreas prioritarias, y se acuerda crear en 1995 el Consejo de Cooperación al Desarrollo que fijará los criterios prioritarios de la AOD y controlará su gestión. Pese a que persiste gran parte del problema tal como lo hemos expuesto, se decide levantar las acampadas, aceptando esta victoria parcial. Dos retos se abren en este punto crítico: primero, seguir avanzando en la mejora de la cooperación española ya que persiste el problema tal como se expuso anteriormente; segundo, constituir un movimiento social en torno al 0,7.

El 0,7 como movimiento social

LOS movimientos sociales son uno de los temas sociopolíticos más relevantes de la teoría y praxis política y, por esa importancia, les han dedicado muchas obras con el afán de explicarlos. Una definición del movimiento social es: una red de personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil, consensuados en una acción y unos valores con el fin de ser actor público de un cambio social. Para ser considerado movimiento social debe tener un amplio apoyo social, una cierta visibilidad y una duración que supere un ciclo de movilizaciones (más allá de una serie de manifestaciones). Un movimiento social carece de reconocimiento jurídico y por tanto puede estar en distintas etapas de consolidación. Es el caso de la «zona solidarista»: nos referimos a una red que todavía no ha dado el salto a «movimiento social». El 0,7 viene a ser un intento de estructurar esa zona convirtiéndola en movimiento social solidarista o «internacionalista» (Díaz-Salazar).

Las causas por las que surge este movimiento ya han sido expuestas en parte al comienzo del texto y son tres:

1. *Socio-culturales:*

1.1. El final de la cultura del pelotazo que fue un modelo antropológico para muchos jóvenes y la emergencia de una nueva ética.

1.2. Comportamientos económicos de crisis en los que se acentúan las redes de solidaridad entre los parientes y los colectivos.

2. *Socio-políticas:*

2.1. Desconfianza de las instituciones políticas tradicionales y de la afiliación permanente.

2.2. Hastío ante el clima político de los 90 cuyo principal mal es la revelación de la corrupción política.

2.3. Carencia de socialización y experiencias políticas colectivas para la generación joven (además de las huelgas de estudiantes del 87, las movilizaciones del 91 contra la Guerra del Golfo y las luchas del 92 contra las tasas).

3. *Civiles:*

3.1. Mayor actividad en la «zona solidarista» y consolidación de las redes.

3.2. Existe una «tensión social» de insatisfacción creciente hacia los problemas del Tercer Mundo impulsada también por la impotencia ante desastres bélicos como Yugoslavia o Ruanda, y hambrunas como Somalia.

Dentro de estas causas estructurales, coinciden activistas estudiantiles, católicos y de ONGs solidaristas en un mismo grupo, y se convierten en el grupo promotor. Los directores de esta «socioempresa» comienzan buscando apoyos para su reivindicación, y solamente cuando ven que activan a parte de la zona social dan el salto a configurar una movilización. A través de la huelga de hambre logran conectar a las personas y organizaciones con los «sueños sociales» particulares: logran encarnar parte de esos sueños sociales que se forman en los ámbitos privados.

El acierto está en encauzar aquella tensión social a través de un fin útil y material: «0,7 ya». Igual que los nuevos movimientos sociales, el movimiento 0,7 tiene un «carácter emancipatorio» (Riechmann). Además de lo instrumental, la Plataforma logra crear una «cultura institucional» a la que se refieren sus miembros como «estilo 0,7» y que incorpora gran parte de los valores «progresistas» como son el ecologismo, pacifismo, feminismo, basismo (lo vecinal, lo popular-democrático), etc. Todos estos componentes se mezclan en uno solo definiendo la identidad «0,7». Esta identidad se va construyendo conforme se van incorporando distintos colectivos, lo que convierte el proceso en una experiencia de «creación colectiva que provee a la sociedad de ideas» (Eyermañ/Jamison). Los principales rasgos de la «cultura 0,7» son:

1. *Estructural y cotidiano.* Es un discurso profundamente político que busca la transformación estructural de las situaciones de injusticia, pero propugna que el primer cambio tiene que suceder en la vida personal cotidiana de los ciudadanos para que el cambio sea posible a nivel global.

Esta conexión del cambio global con el cambio local y aun personal, recuerda poderosamente aquel lema de Pablo VI: «Contra el hambre, cambia tu vida».

2. *Pacifismo*. De palabras (no a las agresiones verbales contra políticos) y de obras (no a pintadas insultantes, por ejemplo). No hay un «enemigo» definido, sino que en parte es toda la sociedad, lo que refuerza esta movilización como un modo de expiar la culpabilidad que se pretende sea reparadora y en la que se insiste constantemente.

3. *Ecologismo*. Las zonas de acampada se mantienen limpias incluso de colillas de tabaco contra las que se organizan batidas de recogida.

4. *Comunitarismo*. Además de una convivencia generalmente respetuosa con el silencio nocturno, hay una organización común para comida, luz, agua, servicios higiénicos, guardias nocturnas de vigilancia, etc. A esta infraestructura colaboran los acampados (aunque también hay «polizones») con un gran sentido del sacrificio y de integración en la comunidad. Se le da mucha importancia a este colectivismo como un modo de vida y de superar el individualismo.

5. *Aconfesionalidad*. Pese a que más de la mitad de los participantes son militantes de grupos cristianos, y es conocido explícitamente por todos, hay una ausencia de signos religiosos que busca la unidad ecuménica en el solidarismo.

6. *Democracia participativa*. Se considera que todo el mundo es igual para decidir, conectando con el asamblearismo característico de las universidades. Nombran representantes pero dentro de una intención de transparencia absoluta y de rotación de los cargos. Aunque es interclasista, se identifica con las organizaciones populares de base (basismo) y estéticamente adopta sus formas (austeridad, informalidad, etc.).

7. *Estructura reticular*. La organización de las personas adheridas no es a través de una afiliación, sino que es una red de comunicación que se coordina. Este modo de funcionar tiene vínculos menos fuertes con los «socios», lo que manifiesta cómo se huye del compromiso con una sola entidad. Pero también favorece procesos más consensuados de decisión, y mayor capacidad de penetración social.

8. *Ilustración*. Las motivaciones para participar son sobre todo cognitivas y emocionales, no responden al modelo del «homo economicus» que defienden autores como Mancur Olson. Pero la acción que mueve a la Plataforma presume de ser racional y se basa en convicciones enraiza-

das en un análisis hondo del problema que nos lleva a hablar del «militante ilustrado».

El carácter expresivo de la acampada es indiscutible, y esto se ve en la gran cantidad de carteles o de pintadas en un «muro de la indiferencia» que se ha construido dividiendo el lugar de acampada del Ministerio de Hacienda y que quiere simbolizar la presunta inmunidad de los poderes frente a los muertos de hambre. También es importante el carácter lúdico de muchas de las actividades que profundizan en un tema a partir de juegos o dinámicas. Además, hay innumerables manifestaciones artísticas que se materializan en una iconografía la identidad colectiva que se está fabricando según el movimiento avanza a través de canciones, poemas, lemas, dibujos, mascotas, esculturas, etc. Todos estos objetos no son mudos, sino que están hablando de los sueños de la gente.

Igualmente, todo el modo de organizarse no es simplemente una manera de gestión, sino que es un mensaje en sí mismo a la sociedad: a través del modo de funcionar se está hablando.

Las redes de la zona solidarista, sumergidas socialmente (sin visibilidad pública), emergen porque identifican sus sueños y su cultura con la Plataforma, evaluando la acción y las metas como posibles. Se considera que este conflicto entre el Primer y el Tercer Mundo no está encauzado, carece de instituciones que les dé vías de solución porque se considera que la política de cooperación es insuficiente. Tras la aprobación del Consejo de Cooperación y del aumento gradual del porcentaje al desarrollo, las movilizaciones de la tercera parte finalizan y se abre una cuarta etapa donde se sienten varias contradicciones que son sintomáticas a todos los nuevos movimientos sociales.

Hacia la cuarta etapa: 0,7 y más

LA primera dificultad es que el conflicto está canalizado y de nuevo hay que redefinir los intereses que unen a los integrantes de la Plataforma y hacer «sentir la necesidad» en la sociedad de que está insuficientemente logrado. De esto depende que continúen catalizando los intereses de la «zona solidarista».

La segunda dificultad viene de la tensión entre dos opciones: integrarse o marginarse. La integración supone participar en el Consejo de

Cooperación y, perder la independencia al asumir responsabilidad política. Excluirse al margen es no enriquecer desde dentro en los procesos pero mantener la credibilidad del independiente.

La tercera, posibilismo versus radicalismo. Firmar acuerdos que no consigan totalmente las reivindicaciones aunque los logros sean significativos.

En cuarto lugar, un debate entre dotar al movimiento de una organización formal mínimamente jerarquizada o adoptar una estructura horizontal asamblearia.

Y quinta, ampliar el alcance del movimiento a más personas y entidades aun a riesgo de que se «vulgarice» la cultura grupal. El contrario es mantener el purismo controlando el acceso a la participación.

La solvencia con que la Plataforma resuelva estos conflictos decidirá si se logra pasar de una «movilización» a un «movimiento social» y el principal test lo encontramos en cuánta gente logra hacer transitar de la movilización de las acampadas a nuevas movilizaciones.

Hay varios factores favorables a que se logre constituir un «movimiento solidarista»: primero, la viveza de la «zona solidarista»; segundo, cómo han logrado conectar con la generación más joven de nuestra democracia; tercero, su implantación por todo el Estado; y cuarto, el que disponen de un equipo de profesionales asesorando sobre el modo de organizarse y moverse, lo que convierte a la Plataforma en un «movimiento reflexivo», aunque muy volcado a la acción.

El movimiento solidarista viene a hacer su aportación a la cultura socio-económica, igual que el ecologismo, el pacifismo o el feminismo hacen sus aportaciones en distintas dimensiones de la sociedad. Componen los vectores de una nueva cultura política que ha sido asimilada por la mayoría de la población y por los programas electorales de los partidos. El gran logro que se persigue en la Plataforma, además de una mejora de la cooperación pública, es una transformación de la cultura política de la comunidad civil. Esperamos que desde esta «biografía colectiva» hayamos aportado una lectura eficaz a esa meta.

Frente a una juventud despolitizada, que como culmen de un llamado posmodernismo se instala en la inmunidad social, emergen otros jóvenes que se atreven a soñar de día con un mundo mejor y saben hacer real lo posible a través de una nueva cultura política.